

GRECIA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El 20 de agosto ha sido una fecha histórica para Grecia. Después de casi nueve años de crisis profunda y tres programas de rescate, ha cerrado el último de ellos, abriendo así una nueva etapa en la que tendrá que volver a financiarse por sí misma.

«Sin la asistencia financiera europea, la economía griega hubiera colapsado, quizás no recuperándose en décadas», según ha comentado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, añadiendo que «todas las economías de la UE hubieran sido arrastradas, al menos en parte, al abismo griego».

«Claramente, la realidad sobre el terreno continúa siendo difícil», ha comentado Moscovici si bien señalando que el tiempo para la austeridad ha terminado. «Todavía hay mucho trabajo por hacer para que Grecia pueda mantenerse en pie», sobre todo en lo referido a la reducción de su deuda y la aplicación de las reformas acordadas.

Los griegos estrenarán un mecanismo de "vigilancia reforzada". De esta manera, sus socios se asegurarán que aplican las reformas aprobadas y cumplen con los objetivos fiscales que, según reconocen las fuentes consultadas, son "elevados y ambiciosos".

Con 288.700 millones de euros en préstamos, considerada la mayor asistencia financiera de la historia, y medidas de austeridad sin precedentes, el país heleno sale formalmente de la tutela de sus acreedores, pero seguirá recibiendo las visitas de la troika cada tres meses y deberá cumplir una rígida senda de austeridad presupuestaria durante más de cuatro años.

Grecia ha cerrado el tercer programa de ayuda con un superávit primario del 4,2% del PIB (al cierre de 2017), y una economía que se espera que crezca por encima del 2% este año y el que viene. Pero el precio para evitar la bancarrota, sanear su sistema productivo, limpiar sus cuentas y mantenerse dentro del euro ha sido muy elevado.

Pese a la recuperación de los indicadores económicos, el escepticismo reina entre los inversores y analistas, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los prestatarios de Grecia durante estos años, que considera inviable el alto endeudamiento del país. Así, este organismo cree ineludible una quita real sobre su deuda y considera insuficientes las medidas de alivio aprobadas en junio pasado por los acreedores del país, que alargaron los plazos para la devolución de algunos préstamos y

suavizó el tipo de interés aplicado en otros.

Desde la firma del primer programa de asistencia en mayo 2010, Grecia ha perdido el 25% de su producto interior bruto y la deuda pública se ha disparado del 127% hasta el 180% de su PIB. Los ciudadanos griegos han visto reducirse a la mitad su poder adquisitivo. El paro aún sigue en el 19,5%, el empleo que se crea es en buena parte a tiempo parcial, y cada vez más gente tiene que vivir con el salario mínimo de 586 euros mensuales.

Por todo ello, el país ha vivido un enorme éxodo de su población joven: más de medio millón de griegos abandonaron el país en busca de mejores oportunidades. Una sangría importante en un país que ahora pretende resurgir de sus cenizas, para lo que necesita capital humano.

Aun así, hay datos económicos positivos: la bajada del paro en mayo pasado hasta el 19,5% significa que, por primera vez en siete años, esta tasa se sitúa por debajo del 20% y queda lejos del 28% alcanzado en los peores momentos de la crisis; el país ha dejado atrás la recesión y ha pasado de una caída del PIB del 5,5% en 2010 a crecer un 1,4% en 2017, y el déficit público del 13,6% que alertó a la UE en 2009 ha dado paso a un superávit del 0,8%.

Después del desembolso del último tramo del tercer rescate (por un total de 15.000 millones de euros), el país cuenta con un *colchón* de unos 24.000 millones que deberá servir para cubrir eventuales necesidades financieras durante 22 meses.

Aunque la intención del Gobierno de Alexis Tsipras es salir cuanto antes a obtener financiación por sí misma, las crisis italiana y turca mantienen la rentabilidad ofrecida por el bono griego a diez años por encima del 4%, un nivel que complica mucho a Atenas su financiación en los mercados. Las agencias de calificación no ven todavía al bono heleno en grado de inversión, a pesar de que todos, políticos y economistas, se deshacen en elogios sobre los esfuerzos fiscales -sin parangón en la Unión Europea- que ha hecho el país.

Levantar el país no será fácil, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha comprometido a generar superávit primarios, del 3,5% hasta 2022, y del 2,2% de media hasta 2060.

Las consecuencias negativas de los nueve años de austeridad castigan la sociedad griega. Los jubilados, hasta hace poco el sostén de muchas familias golpeadas por el paro, han perdido en torno al 40% de sus ingresos, y tres cuartas partes de los pensionistas tienen que vivir con menos de 1.000 euros al mes. Además, las pensiones sufran un nuevo

recorte el próximo año, tal y como lo prevé el acuerdo firmado con los acreedores para la era post-rescate.

En un año electoral como 2019, Tsipras confía en poder evitar ese compromiso con los acreedores, pero para eso, sin embargo, deberá generar un superávit primario superior al 3,5% del PIB pactado. Se espera que en la feria industrial de Salónica en septiembre -utilizada tradicionalmente para anunciar el programa de Gobierno en el nuevo curso político-, Tsipras plantee algunas ideas que lleven un sello definitivamente más social que hasta ahora.

Hasta entonces, los analistas auguran una remodelación de Gobierno, con nuevas caras que le sirvan para dar visibilidad a esas ideas y que simbolicen un cambio hacia la autogestión, en la que uno de los objetivos primordiales será recuperar la confianza de los mercados para atraer inversores extranjeros.

La batalla política interna en el país, las turbulencias económicas externas y las exigentes metas fiscales que tiene que cumplir Atenas durante el próximo medio siglo auguran un futuro cuesta arriba para el país. Para algunos, será inevitable una nueva renegociación de la deuda, la más elevada de la UE en relación con su PIB (176%). Otros dentro y fuera del país consideran probable que sea necesario un nuevo programa de ayuda. De momento, el mensaje de la Comisión es que el final del programa marca solo el principio de una nueva batalla.

En una entrevista publicada el 29 de agosto por *Greek News Agenda*, el boletín anglófono de la Secretaría General de Medios y Comunicación del Gobierno, Mijalis Psalidópulos, profesor de Economía de la Universidad de Atenas y desde junio de 2015 Director Ejecutivo Suplente del FMI, ha hablado del futuro del país. Que, según él, «será diferente en lo que concierne a la independencia fiscal del país, un nivel de independencia prácticamente inexistente hasta el 20 de agosto de 2018. Sin embargo Grecia seguirá bajo estricta supervisión presupuestaria dados sus compromisos con respecto a sus acreedores. Pero no habrá intervención, tan minuciosa como antes, en su política.

Psalidópulos afirma que Grecia debe controlar su estabilidad macroeconómica para que no haya otra vez esta necesidad de apoyo. «Cuando surge algún desequilibrio, se requiere supervisión sobre el desarrollo económico por un lado, acción inmediata por otro lado. Tenemos que terminar con la práctica de encubrir problemas evitando cualquier cambio en la política financiera para no chocar con intereses creados».

Aunque la deuda de Grecia es enorme, (180% del PIB), Psalidópulos no la considera insostenible, como afirman muchos analistas. Una gran parte de la deuda es pública (Europea) y por consiguiente no sujeta a fines de especulación privada. Al mismo tiempo se controla la necesidad de financiación para el reembolso de la deuda que alcanza el 15% - 20% del PIB por año. El Eurogrupo recientemente tomó la decisión del alivio de la deuda griega comprometiéndose a tomar medidas suplementarias en 2023, si fuese necesario. El mismo FMI, tan preocupado en el pasado por la sostenibilidad de la deuda griega, afirma hoy que la deuda quizá sea "incierto" pero después del 2033. El debate ahora debe centrarse «en el crecimiento económico, desprendiéndose de todo tipo de teorías sobre la viabilidad de la deuda».

«A medio plazo la economía griega debería recuperarse, a pesar de la carga actual de los impuestos. Sin duda hay dificultades. Por desgracia no hay ninguna posibilidad de inversión pública masiva, algo que le daría al país el "gran empujón", algo que reduciría el desempleo y sacaría provecho de los factores de producción que de momento son inactivos. La creencia de que sólo el sector privado puede contribuir a la convergencia rápida de la economía griega con la de los Estados miembros tropieza con el choque que ha sufrido el sector privado en los últimos ocho años. Las expectativas de los inversores griegos siguen afectadas por la crisis y el sector público debería hacer más para alentar a los inversores a asumir riesgos. Opino que las instituciones europeas están empezando poco a poco a comprender este problema».